MARISTELLA SVAMPA

Las fronteras del neoextractivismo en América Latina

Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias

CALAS
MARIA SIBYLLA MERIAN CENTER

Maristella Svampa
Las fronteras del neoextractivismo en América Latina

Información bibliográfica publicada por la Biblioteca Nacional Alemana
La Biblioteca Nacional Alemana cataloga esta publicación en la Bibliografía Nacional Alemana: los datos bibliográficos detallados se encuentran disponibles en http://dnb.d-nb.de

CC BY ND

Este trabajo está autorizado bajo la licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 (BY-ND), lo que significa que el texto puede ser compartido y redistribuido, siempre que el crédito sea otorgado al autor, pero no puede ser mezclado, transformado o construir sobre él. Para más detalles consúltese **http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/**

Para crear una adaptación, traducción o derivado del trabajo original, se necesita un permiso adicional y puede ser adquirido contactando **publicaciones@calas.lat**

Los términos de la licencia Creative Commons para reuso no aplican para cualquier contenido (como gráficas, figuras, fotos, extractos, etc.) que no sea original de la publicación Open Acces y puede ser necesario un permiso adicional del titular de los derechos. La obligación de investigar y aclarar permisos está solamente con el equipo que reuse el material.

MARISTELLA SVAMPA

Las fronteras del neoextractivismo en América Latina

Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias

CALAS
MARIA SIBYLLA MERIAN CENTER

Universidad de Guadalajara

Miguel Ángel Navarro Navarro
Rectoría General

Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Vicerrectoría Ejecutiva

José Alfredo Peña Ramos
Secretaría General

Héctor Raúl Solís Gadea
Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Sayri Karp Mitastein
Dirección de la Editorial Universitaria

Primera edición, 2019

Autor
© Maristella Svampa

BIELEFELD UNIVERSITY PRESS

An Imprint of transcript Verlag
http://www.bielefeld-university-press.de

Printed by Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
Print-ISBN 978-3-8376-4526-2
PDF-ISBN 978-3-8394-4526-6
https://doi.org/10.14361/9783839445266

Impreso y hecho en Alemania
Printed and made in Germany

CALAS
MARIA SIBYLLA MERIAN CENTER

Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales

Sarah Corona Berkin
Olaf Kaltmeier
Dirección

Gerardo Gutiérrez Cham
Hans-Jürgen Burchardt
Codirección

Nadine Pollvogt
Coordinación de Publicaciones

www.calas.lat

Gracias al apoyo de

Federal Ministry of Education and Research

En colaboración con

EDITORIAL UNIVERSITARIA

EDITORIAL UCR

UNSAM EDITA

FLACSO Ecuador

Colección CALAS

Este libro forma parte de una colección especial de ensayos concebidos desde la investigación interdisciplinaria que se lleva a cabo en el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), donde tratamos de fomentar el gran reto de analizar aspectos críticos sobre los procesos de cambios sociales. CALAS ha sido concebido como una red afín a la perspectiva de los Centros de Estudios Avanzados establecidos en distintas universidades del mundo y busca consolidarse como núcleo científico que promueve el desarrollo y la difusión de conocimientos sobre América Latina y sus interacciones globales. CALAS funciona en red, la sede principal, ubicada en la Universidad de Guadalajara (México), y las subsedes ubicadas en la Universidad de Costa Rica, Flacso Ecuador y Universidad Nacional de General San Martín en Argentina. Las instituciones latinoamericanas sedes están asociadas con cuatro universidades alemanas: Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena; esta asociación fue impulsada por un generoso apoyo del Ministerio Federal de Educación e Investigación en Alemania.

Hemos decidido publicar esta colección de libros enfocados al análisis de problemas sociales, cuya relevancia trasciende linderos académicos. Se trata de aumentar la reflexión crítica sobre los conflictos más acuciantes en América Latina, como una contribución de primer orden para generar diálogos desde múltiples disciplinas y puntos de vista. Más allá de esto, el objetivo de esta serie es buscar caminos para afrontar las múltiples crisis.

Como reconocidos analistas en sus respectivos campos de investigación, los autores de estos volúmenes de ensayos nos invitan a ser copartícipes de sus reflexiones y a multiplicar los efectos de sus propuestas, a partir de su lectura.

Sarah Corona Berkin y Olaf Kaltmeier
Directores

Gerardo Gutiérrez Cham y Hans-Jürgen Burchardt
Codirectores

Índice

Introducción 11

Capítulo 1. Neoextractivismo y desarrollo 14

- Extractivismo y neoextractivismo 14
- El neoextractivismo como "ventana privilegiada" 17
- El neoextractivismo como estilo de desarrollo y modelo socioterritorial 21
- Consenso de los Commodities e ilusión desarrollista 24

Capítulo 2. Conflictos socioambientales y lenguajes de valoración 31

- Fases del neoextractivismo 31
- Territorio y nuevos lenguajes de valoración 38
- Matrices político-ideológicas y giro ecoterritorial de las luchas 41
- Los conflictos socioambientales y sus escalas 45

Capítulo 3. Alcances del giro ecoterritorial 54

- Tópicos del giro ecoterritorial 54
- Neoextractivismo y pueblos indígenas 58
- Feminismos populares del sur 64

Capítulo 4. Hacia un neoextractivismo de figuras extremas 69

- El avance de la violencia extractivista 69
- Enclaves y territorialidades criminales 71
- La otra cara del patriarcado: extractivismo y cadenas de violencia 76

La expansión de las energías extremas y nuevos conflictos 78
La ampliación de la geografía de la extracción 85

Capítulo 5. Fin de ciclo y nuevas dependencias 90

China y los marcos de una nueva dependencia 90
El fin del ciclo progresista como *lingua franca* 95
Los límites del progresismo realmente existente 100

Reflexiones finales. Dimensiones de la crisis sistémica 104

Dimensiones de la crisis: el Antropoceno 104
Antropoceno, crítica al neoextractivismo y alternativas 109
Enfoques relacionales y vías de la interdependencia 115
Las dimensiones de la crisis en América Latina 119

Bibliografía 124

Autora 141

Agradecimientos

Agradezco al Grupo Permanente de Trabajo de Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo e integrado principalmente por intelectuales y activistas de América Latina, entre ellos Alberto Acosta, Edgardo Lander, Miriam Lang, Horacio Machado Aráoz, Esperanza Martínez, Elizabeth Peredo, Emiliano Terán Mantovani, Luis Tapia, además de la autora de este trabajo, con quienes venimos debatiendo desde 2010 muchos de los temas que aparecen en este libro. En Argentina, mi agradecimiento especial a Enrique Viale, abogado ambientalista, con quien desde hace años compartimos un espacio de reflexión y de lucha, ligado a la defensa de la vida y los territorios.

Introducción

A principios del siglo XXI las economías latinoamericanas se vieron enormemente favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (*commodities*), y comenzaron a vivir una época de crecimiento económico. Esta nueva coyuntura coincidió con el cambio de época, caracterizado por el cuestionamiento del consenso neoliberal, las intensas movilizaciones sociales y el cuestionamiento de las formas más tradicionales de representación política. Posteriormente, en diversos países de la región, el ciclo de protesta se vio coronado por la emergencia de gobiernos progresistas, de izquierda o centroizquierda, los que, por encima de sus diferencias, combinaron políticas económicas heterodoxas con la ampliación del gasto social y la inclusión por el consumo. Arrancó así el denominado ciclo progresista latinoamericano, que se extendió al menos hasta 2015-2016.

Durante este periodo de rentabilidad extraordinaria, más allá de las referencias ideológicas, los gobiernos latinoamericanos tendieron a subrayar las ventajas comparativas del *boom* de los commodities, negando o minimizando las nuevas desigualdades y asimetrías económicas, sociales, ambientales, territoriales, que traía aparejada la exportación de materias primas a gran escala. Con el correr de los años, todos los gobiernos latinoamericanos sin excepción habilitaron el retorno en fuerza de una visión productivista del desarrollo, y buscaron negar o escamotear las discusiones acerca de las implicancias (impactos, consecuencias, daños) del modelo extractivo exportador. Más aún, de modo deliberado multiplicaron los grandes emprendimientos mineros y las megarrepresas, al tiempo que ampliaron la frontera petrolera y

agraria, esta última a través de monocultivos como la soja, los biocombustibles y la palma africana.

Paulatinamente y ante el desarrollo de los conflictos, un concepto, dotado de dimensiones analíticas y con una gran carga movilizadora, comenzó a recorrer la región para caracterizar el fenómeno emergente: *neoextractivismo*. Cierto es que no se trataba de un hecho completamente novedoso, pues sin duda los orígenes del extractivismo se remontan a la conquista y colonización de América Latina por Europa, en los albores del capitalismo. Sin embargo, al calor del nuevo siglo XXI, el fenómeno del extractivismo adquirió nuevas dimensiones, no sólo objetivas –por la cantidad y la escala de los proyectos, los diferentes tipos de actividad, los actores nacionales y transnacionales involucrados–, sino también de otras subjetivas, a partir de la emergencia de grandes resistencias sociales, que cuestionaron el avance vertiginoso de la frontera de los commodities y fueron elaborando otros lenguajes y narrativas frente al despojo, en defensa de otros valores –la tierra, el territorio, los bienes comunes, la naturaleza–.

Al mismo tiempo, la dimensión de disputa y de conflicto introducida por la nueva dinámica de acumulación del capital basada en la presión sobre los bienes naturales, las tierras y los territorios, fue generando enfrentamientos entre, por un lado, organizaciones campesino-indígenas, movimientos socioterritoriales, colectivos ambientales, y, por otro lado, gobiernos y grandes corporaciones económicas, lo cual abarcó no sólo a los regímenes conservadores y neoliberales, sino también a aquellos progresistas, que tantas expectativas políticas habían despertado. Definido ya como neoextractivismo, la nueva fase introdujo dilemas y fracturas dentro del campo de las organizaciones sociales movilizadas y de las izquierdas, que mostraron los límites de los progresismos realmente existentes, visible en su vínculo con prácticas políticas autoritarias e imaginarios hegemónicos del desarrollo. Hacia 2013, el fin del llamado "superciclo de los commodities", lejos de significar un debilitamiento, nos confrontó con una profundización del neoextractivismo en todos los países. En la actualidad, la consolidación de la ecuación "a más extractivismo menos democracia" aparece ilustrada por la flexibilización de los ya escasos controles ambientales existentes, así como por el endurecimiento de los contextos de criminalización y el incremento de los asesinatos a activistas ambientales, en el marco de la disputa por la tierra y el acceso a los bienes naturales.

En este texto me propongo hacer una síntesis de la expansión del neoextractivismo en la región latinoamericana a través de cinco capítulos. Para ello, en el primer capítulo me abocaré a presentar algunos de los conceptos críticos en relación con esta problemática, entre ellos neoextractivismo, Consenso de los Commodities e ilusión desarrollista. Para justificar su pertinencia, daré cuenta del modo en cómo estos conceptos arrojan luz sobre la crisis actual en sus diversas dimensiones. En el capítulo dos abordaré la conflictividad socioambiental, sus diferentes escalas, así como el nuevo lenguaje de valoración del territorio que se ha ido gestando al compás de esas luchas, al que he denominado *giro ecoterritorial*. En el capítulo tres propongo un abordaje de las complejidades que presenta el actual giro ecoterritorial, como tendencia presente en las luchas socioambientales, haciendo hincapié en los dilemas que atraviesan el reconocimiento de los derechos indígenas, así como en la expansión de nuevas formas de feminismo popular en la región. En el capítulo cuarto me ocuparé de dar cuenta de la nueva fase del neoextractivismo a través de sus figuras extremas: territorialidades criminales, violencia estatal y paraestatal, violencia patriarcal, en fin, expansión de las energías extremas. El capítulo cuatro indaga sobre el contexto geopolítico y las formas que asume la nueva dependencia en relación con China. Asimismo explora los límites del ciclo progresista y propone un balance del mismo, más allá de la expansión del neoextractivismo.

Finalmente, el libro se cierra con una reflexión sobre la crisis sistémica. Para ello retoma el concepto de Antropoceno, un diagnóstico que une la crisis socioecológica de alcance planetario con la crítica a los modelos de desarrollo vigentes. Al mismo tiempo avanza sobre algunos de los conceptos-horizontes que recorren el análisis crítico y el lenguaje de los movimientos sociales contrahegemónicos, tanto en América Latina como en Europa.

Capítulo 1. Neoextractivismo y desarrollo

En este primer capítulo presento los conceptos críticos más generales que guiarán el análisis a lo largo de este libro, a saber, neoextractivismo, Consenso de los Commodities e ilusión desarrollista. Asimismo, propongo establecer las líneas de continuidad y de ruptura entre extractivismo y neoextractivismo.

Extractivismo y neoextractivismo

El neoextractivismo es una categoría analítica muy productiva nacida en América Latina que posee una gran potencia descriptiva y explicativa, así como también un carácter denunciativo y un fuerte poder movilizador. Esta aparece a la vez como una categoría analítica y como un concepto de corte fuertemente político, pues nos "habla" elocuentemente acerca de las relaciones de poder y las disputas en juego y remite, más allá de las asimetrías realmente existentes, a un conjunto de responsabilidades compartidas y al mismo tiempo diferenciadas entre el norte y el sur global, entre los centros y periferias. Asimismo, en la medida en que alude a patrones de desarrollo insustentables y advierte sobre la profundización de una lógica de desposesión, tiene la particularidad de iluminar un conjunto de problemáticas multiescalares, que definen diferentes dimensiones de la crisis actual.

Sería imposible a esta altura sintetizar los aportes y caracterizaciones debido a la profusión de artículos y libros existentes sobre el tema, lo cual se extiende a la utilización que los actores afectados y movimientos sociales hacen de la categoría de neoextractivismo. En esta primera aproximación me interesa dar cuenta de algunas lecturas que apuntan a la pluridimensionalidad y multiescalaridad del fenómeno. Así, por ejemplo, en términos de modelo de acumulación todos los autores reconocen las raíces históricas del extractivismo. Para el economista ecuatoriano Alberto Acosta, "el extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años" y determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente (Acosta 2012). En esa línea, como afirma el argentino Horacio Machado Aráoz, el extractivismo no es una fase más del capitalismo ni un problema de ciertas economías subdesarrolladas, sino que constituye "un rasgo estructural del capitalismo como economía-mundo", "producto histórico-geopolítico de la diferenciación-jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales; los unos pensados como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros" (Machado Aráoz 2013). En sintonía con esta lectura, el venezolano Emiliano Terán Mantovani sostiene que el neoextractivismo puede leerse como un "particular modo de acumulación", sobre todo respecto de las economías latinoamericanas, "que puede ser estudiado desde el ámbito social y territorial que abarca el Estado-nación, sin menoscabo de otras escalas de análisis territoriales" (Terán 2016, 257).

Otros trabajos señeros consideran el extractivismo como un estilo de desarrollo basado en la extracción y apropiación de la naturaleza, "que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas". Así, para el uruguayo Eduardo Gudynas, el extractivismo está referido a un "modo de apropiación" antes que un modo de producción; esto es, "un tipo de extracción de recursos naturales", que refiere a actividades que remueven grandes volúmenes o alta intensidad de recursos naturales, no procesados (o limitadamente), orientados a la exportación. A lo largo de la historia han existido sucesivas generaciones de extractivismos, destacándose en la actualidad los extractivismos de tercera y cuarta generación, caracterizados por el uso intensivo de agua, energía y recursos. Asimismo, hay diferencias entre el extractivismo tradicional –que repli-

can los gobiernos más conservadores de la región– y el neoextractivismo progresista, de nuevo tipo, donde el Estado juega un papel más activo en la captación del excedente y la redistribución, garantizando de ese modo cierto nivel de legitimación social, aun si por supuesto se repiten los impactos sociales y ambientales negativos (Gudynas 2009 y 2015).

Desde mi perspectiva, en coincidencia con muchos de estos análisis, la dimensión histórico-estructural del extractivismo está vinculada a la invención de Europa y la expansión del capital. Asociada a la conquista y el genocidio, el extractivismo en América Latina es así de larga data. Desde tiempos de la conquista, los territorios latinoamericanos han sido coto de destrucción y de saqueo. Rica en recursos naturales, la región se fue reconfigurando una y otra vez al calor de los sucesivos ciclos económicos, impuestos por la lógica del capital, a través de la expansión de las fronteras de las mercancías; una reconfiguración que a nivel local conllevó grandes contrastes entre rentabilidad extraordinaria y extrema pobreza, así como una gran pérdida de vidas humanas y de degradación de territorios, convertidos en áreas de sacrificio. Potosí, en Bolivia, marcó el nacimiento de un modo de apropiación de la naturaleza a gran escala y de un modo de acumulación, caracterizado por la exportación de materias primas y por un tipo de inserción subordinada en la economía mundial. Especialización interna y dependencia externa fueron consolidando lo que el venezolano Fernando Coronil llamó con acierto sociedades *exportadoras de naturaleza.*

La historia del extractivismo en la región no es empero lineal, pues aparece atravesada por los sucesivos ciclos económicos, dependientes de las demandas del mercado mundial,[1] así como por los procesos de consolidación del Estado nacional –sobre todo a mediados del siglo XX–, los cuales permitieron un determinado control de la renta extraordinaria, tanto de la minería como del petróleo.

1 Como bien señala el sociólogo boliviano René Zavaletta (2009), dicha rotación puede ser ilustrada por la historia de la economía peruana, la cual saltó del ciclo de la plata y pasó sucesivamente por el *boom* del caucho, el guano, el salitre y nuevamente, en el presente, el auge minero.

Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, el extractivismo se cargó de nuevas dimensiones. En ese contexto, donde es posible registrar continuidades y rupturas, es que el concepto aparece recreado como neoextractivismo. Continuidades porque, al calor de los sucesivos ciclos económicos, el ADN extractivista con que el capital europeo marcó la memoria larga de la región fue alimentando también un determinado imaginario social sobre la naturaleza y sus bondades. En consecuencia, el extractivismo fue asociado no sólo al despojo y el saqueo a gran escala de los bienes naturales, sino también a las ventajas comparativas y las oportunidades económicas que emergieron al compás de los diferentes ciclos económicos y del rol del Estado. No por casualidad, ante los progresismos reinantes, el neoextractivismo volvió a instalar con fuerza la ilusión desarrollista, expresada en la idea de que, gracias a las oportunidades brindadas por el nuevo auge de los commodities y más aún del papel activo del Estado, sería posible lograr el desarrollo.

Rupturas porque la nueva fase de acumulación del capital, caracterizada por la fuerte presión sobre los bienes naturales y territorios, más todavía por la expansión vertiginosa de la frontera de los commodities, abrió a nuevas disputas políticas, sociales y ecológicas, a resistencias sociales impensadas desde el imaginario desarrollista dominante; nuevas brechas de acción colectiva que cuestionaron la ilusión desarrollista al tiempo que denunciaron la consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor, que destruye la biodiversidad, conlleva el acaparamiento de tierras y la destrucción de los territorios.

El neoextractivismo como "ventana privilegiada"

A fin de aprehender lo propio del neoextractivismo contemporáneo, propongo una lectura en dos niveles: una más general, que plantea a éste como ventana privilegiada para dar cuenta de las dimensiones de la crisis actual, y otra más específica, que entiende el neoextractivismo como

un modelo sociopolítico-territorial, plausible de ser analizado a escala nacional, regional o local. Tal como entiendo el neoextractivismo, en las versiones forjadas en los últimos quince años desde América Latina, lejos de ser una categoría plana, constituye un concepto complejo, una ventana privilegiada para leer en sus complejidades y diferentes niveles las múltiples crisis que recorren las sociedades contemporáneas.

En primer lugar, el neoextractivismo se encuentra en el centro de la acumulación contemporánea. Efectivamente, como varios autores han señalado, el aumento del metabolismo social del capital en el marco del capitalismo avanzado exige cada vez más para su mantenimiento mayor cantidad de materias primas y energías, lo cual se traduce por una mayor presión sobre los bienes naturales y territorios. Aunque el intercambio metabólico entre el ser humano y la naturaleza es un tema que atraviesa de modo marginal los escritos de Marx,[2] éste aparece desarrollado por varios representantes del marxismo crítico (y ecológico) en épocas más recientes. Tanto J. O'Connor (2001) como J. Bellamy Foster (2000) subrayan los costos de los elementos naturales que intervienen en el capital constante y variable, la renta de la tierra y las externalidades negativas de toda clase. Mientras que Bellamy Foster habla de "la fractura metabólica", O'Connor denomina a este proceso "la segunda contradicción del capitalismo", señalando que "no hay término único que tenga la misma interpretación teórica que la tasa de explotación tiene en la primera contradicción" (capital/trabajo). Asimismo, ambos autores destacan la apropiación y uso autodestructivo por parte del capital de la fuerza de trabajo, la infraestructura, el espacio urbano, la naturaleza o el ambiente.[3]

2 Como señala en sus escritos Michael Lowy (2011), esta perspectiva crítica ligada al intercambio metabólico entre el ser humano y la naturaleza (que da lugar a la crisis ecológica), se disocia de la vertiente productivista del marxismo predominante en el siglo XX. Véase para el tema Sacher (2016) y también Delgado (2016).

3 En esta línea, ya en los años setenta, autores marxistas como Henry Lefrèvre subrayaban la necesidad de ampliar las lecturas sobre la dinámica del capital. Así, frente a la dialéctica "osificada del capital y el trabajo", el sociólogo francés hacía apelación a una dialéctica del capital, del trabajo y del suelo, no solamente referida a los poderes de la naturaleza, sino de los agentes asociados a ella, incluidos el Estado, que ejerce soberanía sobre un territorio nacional. Citado en Coronil (2002).

Una lectura complementaria con la llamada "segunda contradicción del capitalismo" es la ofrecida por el geógrafo D. Harvey (2004), que coloca en el centro el proceso de acumulación primitiva del capital, analizada por Marx en *El Capital*, esto es, la expropiación y despojo de la tierra al campesinado, a quienes se arroja como proletarios al mercado de trabajo. La actualización de dicha interpretación, sumamente citada en la bibliografía latinoamericana, destaca la importancia de la dinámica de desposesión en la etapa actual, que avanza sobre bienes, personas y territorios. Dicha lectura reconoce un antecedente importante en la obra de Rosa Luxemburgo, quien a principios del siglo XX observaba el carácter continuo –y no asociado de modo exclusivo a los orígenes del capitalismo– de la "acumulación originaria primitiva".

En segundo lugar, el neoextractivismo nos ilumina sobre la crisis del proyecto de modernidad, y de modo más general sobre la actual crisis socioecológica. Ciertamente, la inminencia de que estamos asistiendo a grandes cambios antropogénicos y sociogénicos a escala planetaria, que ponen en peligro la vida en el planeta (Antropoceno), se ha venido traduciendo por un cuestionamiento de las actuales dinámicas de desarrollo, ligadas a la expansión ilimitada de la frontera de mercantilización, así como al cuestionamiento de la visión dualista dominante, asociada a la modernidad. En consecuencia, es posible establecer una relación entre neoextractivismo (como dinámica de desarrollo dominante) y Antropoceno (como crítica a un determinado modelo de modernidad), a la hora de examinar sus consecuencias a escala planetaria. La crisis ecológica aparece así intrínsecamente ligada a la crisis de la modernidad. Parafraseando a Arturo Escobar (2005), nos advierte sobre la necesidad de pensar alternativas a la modernidad, otros paradigmas que recoloquen en el centro la reproducción de la vida y apunten a la recreación del vínculo entre lo humano y lo no humano, desde un visión relacional, no dualista.

En tercer lugar, el neoextractivismo también nos conecta con la crisis económica global, en la medida en que el actual modelo de acumulación aparece asociado a las reformas llevadas a cabo por el capitalismo neoliberal y financiero, desde los años noventa en adelante, profundiza-

das a partir de la crisis financiera del año 2008. Por un lado, lo financiero cumple un rol fundamental en las operaciones de extracción de materias primas, así como en la organización de la logística de su circulación (Gago y Mezzadra 2015); por supuesto, también en la determinación de alzas y bajas de los precios de los commodities en las bolsas internacionales. Por otro lado, la crisis acentuó las desigualdades sociales, a partir de una política de ajuste económico que se extendió en los países centrales e hizo más atractivos modelos económicos que mercantilizan con mayor intensidad la naturaleza, como alternativa para combatir la recesión. De esta forma, desde los países centrales se está impulsando el llamado modelo economía verde con inclusión, que extiende el formato financiero del mercado del carbono hacia otros elementos de la naturaleza, como por ejemplo el aire, el agua, o procesos y funciones de la naturaleza (Svampa y Viale 2014).

En cuarto lugar, el neoextractivismo es una ventana privilegiada que nos permite realizar una lectura en términos geopolíticos, a partir del declive relativo de los Estados Unidos y el ascenso de China como potencia global. Esta situación de *transición hegemónica* es interpretada como el ingreso a un periodo caracterizado por policentrismo conflictivo y la pluralidad en términos culturales-civilizacionales, cuyas consecuencias todavía están por definirse. Desde las periferias globalizadas, tanto en América Latina y África como en ciertas regiones de Asia, la transición hegemónica trajo como correlato la intensificación de las exportaciones de materias primas, lo cual es visible en la consolidación de vínculos económicos y socioecológicos cada vez más desiguales, sobre todo con la República de China. Dicho de otro modo, en el actual contexto geopolítico, que señala al gran país asiático como nueva potencia, el neoextractivismo nos permite leer el proceso de reconfiguración global, que desde las periferias se va traduciendo por la expansión de las fronteras de los commodities y una reprimarización vertiginosa de las economías.

Last but not least, el neoextractivismo es una ventana privilegiada para realizar una lectura en términos de crisis de la democracia, esto es, de la relación entre régimen político, democracia y respeto de los derechos humanos. Ciertamente, la asociación entre neoextractivismo y trastocamiento de las fronteras de la democracia aparece como un hecho indiscutible: sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado, o aun con ella, la tendencia marca la manipulación de las formas de participación popular, con el objeto de controlar las decisiones colectivas. Por otro lado, el aumento de la violencia estatal y paraestatal abre la pregunta sobre los vínculos siempre tensos entre extractivismos y derechos humanos. La ecuación perversa entre "más extractivismo, menos democracia" (Svampa 2016), muestra el peligroso desliz hacia el cierre político, vista la creciente criminalización de las protestas socioambientales y el incremento del asesinato de activistas ambientales en todo el mundo, muy particularmente en América Latina.

En suma, el extractivismo recorre la memoria larga del continente y sus luchas, define un modo de apropiación de la naturaleza, un patrón de acumulación colonial, asociado al nacimiento del capitalismo moderno. Sin embargo, su actualización, en el siglo XXI, trae aparejada nuevas dimensiones a diferentes niveles: globales (transición hegemónica, expansión de la frontera de commodities, agotamiento de los bienes naturales no renovables, crisis socioecológica de alcance planetario), regionales y nacionales (relación entre el modelo extractivo-exportador, el Estado-nación y la captación de renta extraordinaria), territoriales (ocupación intensiva del territorio, luchas ecoterritoriales con participación de diferentes actores colectivos), en fin, políticas (emergencia de una nueva gramática política contestataria, aumento de la violencia estatal y paraestatal).

El neoextractivismo como estilo de desarrollo y modelo socioterritorial

El neoextractivismo contemporáneo puede ser caracterizado como un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos desde el punto de vista del capital. El mismo se ca-

racteriza por la orientación a la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), así como productos ligados al nuevo paradigma agrario (soja, palma africana, caña de azúcar). Definido de este modo, el neoextractivismo designa algo más que las actividades consideradas tradicionalmente como extractivas, pues incluye desde la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura –hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, entre otros–, hasta la expansión de diferentes formas de monocultivos o monoproducción, a través de la generalización del modelo de agronegocios, la sobreexplotación pesquera o los monocultivos forestales.

En esta línea, el neoextractivismo es también un modelo sociopolítico-territorial, plausible de ser analizado a escala nacional, regional o local. Por ejemplo, la expansión de la frontera sojera conllevó una reconfiguración del mundo rural en varios países de América del Sur:

> Sólo entre 2000 y 2014 las plantaciones de soja en América del Sur se ampliaron en 29 millones de hectáreas, comparable al tamaño de Ecuador. Brasil y Argentina concentran cerca del 90% de la producción regional, si bien la expansión más rápida se ha producido en Uruguay, y Paraguay es el país donde la soja ocupa mayor superficie en relación al resto de cultivos: un 67% del área agrícola total (Oxfam 2016, 30).

Otro rasgo mayor del neoextractivismo es el gigantismo o la gran escala de los emprendimientos, la cual nos advierte también sobre la envergadura de las inversiones, pues se trata de megaemprendimientos capital-intensivos, antes que trabajo-intensivos. Esto hace referencia al carácter de los actores intervinientes –en general, grandes corporaciones transnacionales–, aunque por supuesto no están excluidas las llamadas translatinas, esto es, megaempresas nacionales como Petróleo Brasileiro (Petrobras), Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y aun la argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), entre otras. Al mismo tiempo, esto nos advierte sobre una variable importante de los megaproyectos; la escasa generación de empleos directos (cuyo máximo se alcanza en la etapa de construcción del emprendimiento). Por ejemplo, para el caso de la minería a gran escala, por cada millón de dólares invertido se crean apenas entre 0.5 y 2 empleos directos (Colectivo Voces de Alerta, 2011). En Perú, país por excelencia de la megaminería transnacional, ésta ocupa apenas 2% de la población económicamente activa (PEA), contra 23% de la agricultura, 16% en comercio y casi 10% en manufacturas (Lang y Mokrani 2012).

Asimismo, el neoextractivismo presenta una determinada dinámica territorial cuya tendencia es la ocupación intensiva del territorio y el acaparamiento de tierras, a través de formas ligadas al monocultivo o monoproducción, una de cuyas consecuencias es el desplazamiento de otras formas de producción (economías locales/regionales), así como de poblaciones. En esta línea, a inicios del siglo XXI, el neoextractivismo redefinió la disputa por la tierra, lo cual enfrenta de modo asimétrico poblaciones pobres y vulnerables, con grandes actores económicos, interesados en implementar cultivos transgénicos ligados a la soja, la palma de aceite, la caña de azúcar, entre otros. De acuerdo con el informe de Oxfam (con datos de los censos agropecuarios de 15 países), "en conjunto en la región, el 1% de las fincas de mayor tamaño concentra más de la mitad de la superficie agrícola. Dicho de otro modo, el 1% de las fincas acapara más tierra que el 99% restante". Colombia es el país más desigual en el reparto de la tierra, donde 0.4% de las explotaciones agropecuarias domina 68% de la tierra del país, le sigue Perú donde 77% de las fincas está en manos de 1%, luego Chile (74%), Paraguay (71%), Bolivia donde 1% maneja 66% de las fincas, México con 56%, Brasil con 44% del territorio agrícola para 1% de las fincas. En Argentina, 36% está en manos de latifundistas y pools de siembra.[4]

Para Gian Carlo Delgado,

> el despojo de tierras debe considerarse la apropiación de aquellas destinadas a 1) monocultivos, incluyendo los denominados "comodín"

[4] Los datos de Oxfam (2016) se dieron a conocer en noviembre de 2016. Se aclara que éstos se refieren a las explotaciones y no a las personas; por ende, no contabiliza campesinos sin tierra y aportan muy poca información sobre la propiedad colectiva (para los casos de Bolivia, Colombia y Perú). Véase también Aranda (2017).

o *flex* (alimentos/bioenergía/insumos de producción; por ejemplo, maíz, caña, palma africana), y la producción de insumos no alimenticios tales como la celulosa; 2) el acceso, gestión y usufructo de recursos como los minerales energéticos y no-energéticos, así como 3) de agua potable (o *blue grabbing*); y para 4) la conservación o la denominada apropiación verde de las tierras o *green grabbing*, que incluye desde la conformación de áreas protegidas de tipo privado, hasta la instauración de proyectos de mitigación del cambio climático como los denominados redd+ (proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación + de conservación) (Delgado 2016, 54).

Consenso de los Commodities e ilusión desarrollista

En América Latina el neoextractivismo se expandió en un contexto de cambio de época, marcado por el pasaje del Consenso de Washington, asociado a la valorización financiera y el ajuste estructural, al Consenso de los Commodities basado en la exportación a gran escala de bienes primarios, el crecimiento económico y la expansión del consumo (Svampa 2013). Efectivamente, a diferencia de los años noventa, a partir del año 2000-2003 las economías latinoamericanas fueron favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities), todo lo cual se vio reflejado en las balanzas comerciales y el superávit fiscal. El hecho no puede ser desestimado, sobre todo luego del largo periodo de estancamiento y regresión económica de las décadas anteriores, particularmente el periodo abiertamente neoliberal (los noventa). En esta coyuntura económica favorable –al menos hasta 2013–, los gobiernos latinoamericanos tendieron a subrayar las ventajas comparativas del auge de los commodities, negando o minimizando las nuevas desigualdades y asimetrías socioambientales, que traía aparejada la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas a gran escala. En esa línea, todos los gobiernos latinoamericanos, más allá del signo ideológico, habilitaron el retorno en fuerza de una visión productivista del desarrollo lo que, junto con la ilusión desarrollista, conllevó la negación y escamoteo de las discusiones de fondo acerca de los impactos sociales, ambientales, territoriales, políticos, del neoextractivismo, así como la desvalorización de las movilizaciones y protestas socioambientales emergentes.

En términos de consecuencias, el Consenso de los Commodities fue caracterizándose por una dinámica compleja, vertiginosa y de carácter recursivo, que debe ser leída desde una perspectiva múltiple. Así, desde el punto de vista económico, se fue traduciendo por una nueva tendencia a la reprimarización de la economía, visible en la reorientación hacia actividades primario extractivas, con escaso valor agregado. Dicho "efecto de reprimarización" fue agravado por el ingreso de China, potencia que de modo acelerado irá imponiéndose como socio desigual en el conjunto de la región latinoamericana. En 2014, en los países del Mercosur, las exportaciones de bienes primarios se situaban entre 65% (Brasil) y 90% (Paraguay) (Cepal 2015).[5] Incluso un país como Brasil, que cuenta con una economía diversificada, sufrió por esta razón lo que el economista francés Pierre Salama (2011) caracterizó como un fenómeno de "desindustrialización temprana".

El Consenso de los Commodities puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación con el anterior periodo del Consenso de Washington. Ruptura porque existen elementos importantes de diferenciación respecto de los años noventa, asociados al Consenso de Washington, cuya agenda estaba basada en una política de ajustes y pri-

5 Según J. Burchardt, habría que distinguir tres dinámicas regionales en el contexto de expansión de las economías extractivas en América Latina. Por un lado, están aquellos países que se destacan por la tendencia a la monoproducción a través de la exportación de materias primas, como Ecuador y Venezuela (petróleo), Perú y Chile (minería), y Bolivia (gas). Por otro lado, están aquellos países que cuentan con una economía diversificada, pero que efectivamente han incrementado los sectores extractivos, como es el caso de Brasil con la minería, la soja y ahora el petróleo a través del presal. Finalmente, están los países de América Central y México, que durante la primera fase del Consenso de los Commodities no habían apostado completamente al extractivismo, pero avanzan claramente en esa dirección (Burchardt 2016, 63).

vatizaciones, así como en la valorización financiera, lo cual terminó por redefinir al Estado como un agente metarregulador. Asimismo, el neoliberalismo operó una suerte de homogeneización política en la región, marcada por la identificación o fuerte cercanía con las recetas del Banco Mundial. A diferencia de ello, el Consenso de los Commodities puso en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas, que han cuestionado el consenso neoliberal en su versión ortodoxa, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.

Ciertamente, en la visión progresista, el Consenso de los Commodities aparece asociado a la acción del Estado, así como a una batería de políticas económicas y sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base fue la renta extraordinaria asociada al modelo extractivo-exportador. En el nuevo contexto, se recuperaron ciertas herramientas y capacidades institucionales del Estado, el cual volvió a erigirse en un actor regulador y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que apuntan a una institucionalidad basada en marcos supranacionales, la tendencia no es precisamente a que el Estado nacional devenga un megaactor, o que su intervención garantice cambios de fondo. Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral, de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, organización no gubernamental (ONG) y otros actores, pero en estrecha asociación con los capitales multinacionales, cuyo peso en las economías latinoamericanas lejos de retroceder, aumentó de modo importante. De este modo, aunque el planteo progresista haya sido heterodoxo y se haya apartado del neoliberalismo en cuanto al rol orientador del Estado, como señala el economista argentino Mariano Feliz, éste estuvo lejos de cuestionar la hegemonía del capital trasnacional en la economía periférica (Feliz 2012, 24-27). Esta realidad colocó límites claros a la acción del Estado nacional así como un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones colectivas, provenientes de las comunidades y poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos.

Por otro lado, hay que señalar que en América Latina, gran parte de las izquierdas y del progresismo populista continúan sosteniendo una visión productivista del desarrollo,[6] la cual se nutre de una tendencia a privilegiar de manera exclusiva una lectura del conflicto social en términos de oposición entre capital y trabajo, minimizando o colocando escasa atención a las relaciones capital-naturaleza, así como en las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes. En ese contexto, sobre todo al principio del ciclo progresista, la dinámica de desposesión tendió a convertirse en un punto ciego, no conceptualizable. Como consecuencia de ello, las problemáticas socioambientales fueron consideradas como una preocupación secundaria, o lisa y llanamente cuestiones sacrificables, en vistas de los problemas estructurales de pobreza y exclusión de las sociedades latinoamericanas. Así, pese a que en las últimas décadas las izquierdas y los populismos latinoamericanos llevaron a cabo un proceso de revalorización de la matriz comunitario-indígena, gran parte de las mismas continúan adhiriendo a una visión productivista y eficientista del desarrollo, muy vinculadas con la ideología hegemónica del progreso, asentada en la confianza en la expansión de las fuerzas productivas.

En consecuencia, los gobiernos progresistas buscaron justificar el neoextractivismo afirmando que éste es la vía que permite generar divisas al Estado, luego reorientadas a la redistribución del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso cuyo alcance real debería ser analizado caso por caso, y según diferentes fases o momentos, buscaba oponer de modo

6 El productivismo se basa en la idea del crecimiento indefinido e implica un no reconocimiento de los límites de sostenibilidad del planeta. Una excelente definición es aportada por Joaquim Sempere, quien utiliza "el término 'productivismo' para designar cualquier metabolismo social que no respete los límites de la sostenibilidad ecológica porque considera que la especie humana puede permitirse explotar a voluntad y sin límites los recursos naturales" (Sempere 2015).

simplista la cuestión social (la redistribución, las políticas sociales) con la problemática ambiental (la preservación de los bienes comunes, el cuidado del territorio), al tiempo que dejaba afuera discusiones complejas y fundamentales sobre el desarrollo, la sustentabilidad ambiental y la democracia. En realidad, en nombre de las "ventajas comparativas", los gobiernos latinoamericanos buscaron promover un modelo de inclusión asociado al consumo, en clave plebeya-progresista, negando incluso su carácter cortoplacista. Dicho acoplamiento transitorio entre avance del Estado, crecimiento económico y modelo de ciudadano consumidor fue la condición de posibilidad del éxito electoral y de permanencia en el poder de los diferentes gobiernos (por la vía de la reelección).

Más simple, la confirmación de América Latina como una economía adaptativa respecto de los diferentes ciclos de acumulación, y por ende la aceptación del lugar que ésta ocupa en la división global del trabajo, constituye uno de los núcleos duros que atraviesan sin solución de continuidad el Consenso de Washington y el Consenso de los Commodities, más allá de que los gobiernos progresistas hayan enfatizado una retórica que reivindicaba la autonomía económica y la soberanía nacional, y postularan la construcción de un espacio latinoamericano.

Por último, el modelo de desarrollo no sólo se fue apoyando en una visión instrumental y productivista, también implicó la actualización de imaginarios sociales ligados a la (histórica) abundancia de los recursos naturales (la *visión eldoradista* del continente). En algunos países, este imaginario aparecía conectado con la experiencia de la crisis, esto es, con el legado excluyente de los noventa, que produjo el aumento de las desigualdades y la pobreza. Por ejemplo, el final de "la larga noche neoliberal", en la expresión del expresidente ecuatoriano R. Correa, tenía un correlato político y económico, vinculado a la gran crisis de los primeros años del siglo XXI (desempleo, reducción de oportunidades, migración, inestabilidad política). Este tópico apareción también de manera recurrente en el discurso de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina sobre "el país normal", para contraponer los indicadores económicos y sociales de sus respectivos gobiernos con los años neoliberales (los noventa, bajo el ciclo neoliberal de C. Menem) y, sobre todo, con aquellos de la gran crisis que sacudió a ese país en 2001-2002 con el final de la convertibilidad entre el peso y el dólar.

Así, en el marco de una nueva fase de expansión de las fronteras del capital, América Latina retomó este mito fundante y primigenio, alimentando una suerte de pensamiento mágico (Zavaletta 2009), lo que hemos denominado ilusión desarrollista, expresada en la idea de que, gracias a las oportunidades económicas (el alza de los precios de las materias primas y la creciente demanda, proveniente sobre todo desde China), sería posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados, a fin de alcanzar aquel desarrollo siempre prometido y nunca realizado de nuestras sociedades. Sea en el lenguaje crudo de la desposesión (perspectiva liberal) como en aquel que apunta al control del excedente por parte del Estado (perspectiva progresista), los modelos de desarrollo vigente, basados en paradigma extractivista, reactualizaron el imaginario eldoradista que recorre la historia del continente.

En consecuencia, el escenario latinoamericano fue mostrando no sólo un acoplamiento entre neoextractivismo, ilusión desarrollista y neoliberalismo, expresado de manera paradigmática por los casos de Perú, Colombia o México, sino también entre neoextractivismo, ilusión desarrollista y gobiernos progresistas, lo cual trajo como consecuencia la complejización de la relación entre éstos y los movimientos indígenas y socioambientales. Aquellos escenarios latinoamericanos más paradójicos del Consenso de los Commodities durante el apogeo del ciclo progresista fueron Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que fueron estos países, en el marco de fuertes procesos participativos, donde nacieron nuevos conceptos-horizontes como el de Estado plurinacional, autonomías, buen vivir y derechos de la naturaleza, tal como aparece reflejado en las nuevas constituciones sancionadas. Sin embargo, con la consolidación de dichos regímenes, otras cuestiones fueron cobrando importancia, vinculadas a la exportación de materias primas y su relación con el crecimiento económico.

Tal como lo entiendo, el Consenso de los Commodities tiene también una carga político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito o explícito– acerca del carácter irresistible de la actual dinámica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes

primarios. Tal como sucedía en los años dorados del neoliberalismo, en los ochenta y noventa, cuando el discurso dominante afirmaba que no había alternativa al neoliberalismo, a partir del año 2000 las élites políticas de la región (progresistas y conservadoras) sostuvieron que no existe alternativa al extractivismo, lo cual apuntaba a poner límites a las resistencias colectivas sobre la base de la "sensatez y razonabilidad" que ofrecerían las diferentes versiones del capitalismo progresista, al tiempo que instalaba un nuevo umbral histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas. Como sostiene Mirta Antonelli, "la imposición de un único relato y con él un único mundo posible", busca controlar y neutralizar lógicas que proveen "otros argumentos, otras razones, otras memorias y sentires, otros proyectos societales" (Antonelli 2011, 11). En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical se inserta en el campo de la irracionalidad, la antimodernidad, la negación del progreso, del pachamamismo, del ecologismo infantil, cuando no de un ambientalismo colonial, impulsado siempre por algunas ONG o agentes extranjeros. Así, a diferencia de los noventa, cuando el continente aparecía reformateado de manera unidireccional por el modelo neoliberal, el nuevo siglo vino signado por un conjunto de tensiones y contradicciones de difícil procesamiento. El pasaje del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities instaló nuevas problemáticas y paradojas que reconfiguraron incluso el horizonte del pensamiento crítico latinoamericano y el conjunto de las izquierdas.

En suma, por encima de las diferencias que es posible establecer en términos político-ideológicos y los matices que podamos hallar, el escenario latinoamericano muestra la consolidación de un modelo de apropiación y explotación de los bienes comunes, que avanza sobre las poblaciones a partir de una lógica vertical (de arriba hacia abajo), colocando en un gran tembladeral los avances producidos en el campo de la democracia participativa e inaugurando un nuevo ciclo de criminalización y violación de los derechos humanos.

Capítulo 2. Conflictos socioambientales y lenguajes de valoración

En este capítulo se abordará la conflictividad socioambiental en sus diferentes escalas. En primer lugar, en una propuesta que busca historizar y dar cuenta de las dinámicas recursivas de las luchas, se analizan diferentes fases del neoextractivismo. Al mismo tiempo, me detengo sobre las características del nuevo lenguaje de valoración del territorio que se ha ido gestando al compás de esas luchas, al que he denominado *giro ecoterritorial*, tema que será profundizado posteriormente en el próximo capítulo.

Fases del neoextractivismo

Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista es la explosión de conflictos socioambientales, visible en la potenciación de las luchas ancestrales por la tierra, protagonizadas por movimientos indígenas y campesinos, así como en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de lo común, la biodiversidad y el ambiente. Dadas sus características (fragmentación social, desplazamientos de otras formas de economía, verticalidad de las decisiones, fuerte impacto sobre los ecosistemas), antes que su consecuencia, la conflictividad puede ser vista como inherente al neoextractivismo, aun si esto no se traduce en todos los casos por la emergencia de resistencias sociales.

Entiendo por conflictos socioambientales aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen por parte

de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder.[7] Dichos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente. En ciertos casos, en la medida en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, los conflictos terminan por establecer una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, reivindican otras formas de la democracia, ligadas a la democracia participativa y directa.

Con los años, y al calor de las nuevas modalidades de expansión de la frontera del capital, los conflictos también se fueron multiplicando, al tiempo que las resistencias sociales se hicieron más activas y organizadas. En función de ello, propongo distinguir tres fases del neoextractivismo.

La primera es la *fase de positividad*, desarrollada entre 2003 y 2008-2010. Ciertamente, al comienzo del cambio de época y al calor del *boom* del precio de los commodities, el giro extractivista fue leído en términos de ventajas comparativas como un “nuevo desarrollismo” más allá de las diferencias entre gobiernos progresistas o conservadores. Destaco el hecho de que se trató de una fase de positividad, pues el aumento del gasto social y su impacto en la reducción de la pobreza, el creciente rol del Estado y la ampliación de la participación de lo popular generaron grandes expectativas políticas en la sociedad, sobre todo luego de haber transitado sucesivas crisis y décadas de estancamiento económico y ajuste neoliberal. No hay que olvidar que entre 2002 y 2011, en la región la pobreza descendió de 44% a 31.4%, mientras que la pobreza extrema bajó de 19.4% a 12.3% (Cepal 2012). La mayoría de los países extendió la batería de planes sociales, la cual alcanzaría 19% de la población (Cepal 2013), esto es, unas ciento veinte millones de personas bajo planes.

Por otro lado, esta primera fase de neoextractivismo se caracterizó por una suerte de expansión de las fronteras del derecho, visibles en la constitucionalización de nuevos derechos (individuales y colectivos). La narrativa estatalista coexistía, con sus articulaciones y tensiones, con la

[7] Retomo la definición de Fontaine (2003), a la que agrego la referencia al carácter asimétrico de las luchas.

narrativa indigenista y ecologista, tal como sucedía en Bolivia y Ecuador, más allá la hegemonía creciente de la matriz estatal-populista y su articulación con los nuevos liderazgos. Sin embargo, a lo largo de la década y al compás de diferentes conflictos territoriales y socioambientales y de sus dinámicas recursivas, los gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista en defensa del extractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora y tendencialmente represiva de las luchas socioambientales, así como por una voluntad explícita de controlar las formas de participación de lo popular.

Este periodo de auge económico, de reformulación del rol del Estado, fue también un periodo de escasa visibilidad, incluso de no reconocimiento de los conflictos asociados a la dinámica extractiva que se extendió aproximadamente hasta los años 2008-2010, época a partir de la cual los gobiernos progresistas, consolidados en sus respectivos mandatos (muchos de ellos habiendo renovado mandatos presidenciales), fueron afirmando una matriz explícitamente extractivista, a raíz de la virulencia que adquirieron ciertos conflictos territoriales y socioambientales. Más aún, el estallido de la conflictividad ligada a las actividades extractivas (megaminería, megarrepresas, petróleo, expansión de la frontera agraria) pondría en evidencia tanto las dimensiones y alianzas propias del desarrollismo hegemónico, así como las limitaciones impuestas en los procesos de participación ciudadana y la apertura de escenarios de criminalización del conflicto.

La segunda fase corresponde con la *multiplicación de los megaproyectos*, así como también la multiplicación de las resistencias sociales. Respecto de lo primero, esto aparece reflejado en los Planes Nacionales de Desarrollo presentados por los diferentes gobiernos, cuyo énfasis estuvo puesto en todos los casos en el incremento de diferentes actividades extractivas, según la especialización del país: extracción de minerales, de petróleo, las centrales hidroeléctricas o la expansión de los cultivos transgénicos. En el caso de Brasil, su expresión fue el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), lanzado en 2007, que contemplaba la construcción de un gran número de represas en la Amazonia, además de la realización de megaproyectos energéticos ligados a la explotación

del petróleo y el gas; para Bolivia fue la promesa del gran salto industrial, basado en la multiplicación de los proyectos de extracción de gas, litio, hierro y la expansión de agronegocios, entre otros; para Ecuador la apertura a la megaminería a cielo abierto, así como la expansión de la frontera petrolera; para Venezuela el plan estratégico de producción del petróleo, que implicaba un avance de la frontera de explotación en la faja del Orinoco; para Argentina el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que proyectaba el aumento de 60% de la producción de granos, así como posteriormente (2012) la apuesta por el *fracking*. Así, incluso de la mano de retóricas pretendidamente industrialistas, las políticas públicas de los diferentes gobiernos se orientaron a profundizar el modelo neoextractivista, todavía en aquellos tiempos, en un contexto de rentabilidad extraordinaria.

Este incremento de megaproyectos se expresó también a través de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), llamada luego Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan), que abarca proyectos en materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones. Se trata de un programa consensuado hacia el año 2000 por varios gobiernos latinoamericanos, cuyo objetivo central es facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacia sus puertos de destino. A partir de 2007, la IIRSA quedó bajo la órbita de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Tal como afirma la investigadora Silvia Carpio (2017) del CEDLA, el principal impulsor de Unasur y Cosiplan fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien buscó fortalecer los vínculos con otros países de América del Sur por medio de la intensificación del comercio regional y de inversiones del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE) en obras de infraestructura. Sin embargo, en diversas regiones, los proyectos del IIRSA-Cosiplan serán resistidos y cuestionados, ya que a pesar del discurso latinoamericanista en torno a la necesidad de "tejer nuevas relaciones entre estados pueblos y comunidades", la llamada integración de infraestructura de la IIRSA tiene objetivos de mercado. Se trata de 544 proyectos que totalizan una inversión estimada en 130 000 000 000 de dólares. Para 2014, 32.3% de las inversiones dentro de IIRSA estaba reservado al área energética, concentrados principalmente en centrales hidroeléctricas, muy cuestionadas por sus efectos sociales y ambientales, sobre todo en la ya fragilizada zona de la Amazonia brasilera y boliviana (Carpio 2017). Más aún, de 31 proyectos prioritarios del Cosiplan, 14 de ellos tocan la Amazonia (Porto 2017, 158).

Esta segunda etapa nos inserta en un periodo de blanqueo del Consenso de los Commodities, esto es, de abierta conflictividad en los territorios extractivos. Efectivamente, fueron numerosos los conflictos socioambientales y territoriales que lograron salir del encapsulamiento local y adquirieron una visibilidad nacional: desde aquel en torno al proyecto de realizar una carretera que atravesara el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) (Bolivia), la construcción de la megarrepresa de Belo Monte (Brasil), la pueblada de Famatina y las resistencias contra la megaminería (Argentina, 2012), hasta la suspensión final de la propuesta Yasuní (Ecuador, 2013). Lo que resulta claro es que la expansión de la frontera de derechos (colectivos, territoriales, ambientales) encontró un límite en la expansión creciente de las fronteras de explotación del capital, en busca de bienes, tierras y territorios, lo cual echó por tierra las narrativas emancipadoras que habían levantado fuertes expectativas, sobre todo en países como Bolivia y Ecuador.

A estos conflictos de carácter emblemático en los países con gobierno progresista, hay que sumar aquellos que se producían, en la misma línea, en aquellos con gobiernos de signo neoliberal o conservador, tal como fue el caso del proyecto minero Conga, en Perú, hoy suspendido; la oposición al megaproyecto minero La Colosa, en el departamento de Tolima, en Colombia, finalmente suspendido en 2017; el de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en Honduras, que fue suspendido gracias a la acción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016.

En suma, al calor de los diferentes conflictos territoriales y ambientales y de sus dinámicas recursivas, los gobiernos latinoamericanos terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista en

defensa del neoextractivismo, acompañando la narrativa productivista y eldoradista con una abierta práctica de criminalización de las resistencias. Este sinceramiento entre discurso y práctica que ocurrió incluso en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado, sobre todo en relación con las promesas de buen vivir vinculadas al cuidado de la naturaleza –como Ecuador y Bolivia–, ilustraba la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicional (en mucho, ligados al clásico modelo populista o nacional-estatal), así como obligaba al reconocimiento del ingreso a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia, visibles en la intolerancia hacia las disidencias.

Ciertamente, uno de los elementos presentes en los diferentes gobiernos progresistas fue la estigmatización de la protesta ambiental; en algunos casos, la deriva hacia una lectura conspirativa. En realidad, allí donde hubo un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que puso de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la dinámica de desposesión, la reacción de rechazo fue unánime por parte de los oficialismos. Sucedió a partir de 2009 en Ecuador, sobre todo respecto de la megaminería, en Brasil a raíz del conflicto suscitado por la construcción de Belo Monte y en Bolivia referido al Tipnis. En los tres casos, los distintos oficialismos optaron por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo al ecologismo infantil (Ecuador), al accionar de ONG extranjeras (Brasil) o al ambientalismo colonial (Bolivia).

El conflicto del Tipnis fue uno de los más resonantes. Aunque hubo varios episodios que anticiparon una colisión entre la narrativa indigenista y la práctica extractivista, el punto de inflexión se dio entre 2010 y 2011, a raíz de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. El Tipnis es desde 1965 una reserva natural y desde 1990 es reconocido como territorio indígena, hábitat de pueblos amazónicos. La cuestión era sin duda compleja, pues si, por un lado, la carretera respondía a necesidades geopolíticas y territoriales, por otro lado, lo central era que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados. Asimismo, todo indica que la carretera abriría la puerta a proyectos extractivos, con las consiguientes consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como aliado estratégico. En fin, la escalada del conflicto entre organizaciones indígenas y ambientalistas versus gobierno fue tal que incluyó varias marchas desde el Tipnis hasta la ciudad de La Paz, además de un oscuro episodio represivo y la articulación de un bloque multisectorial entre organizaciones indígenas rurales, sociales y ambientalistas, con el apoyo de ingentes sectores urbanos. En 2012 el gobierno de Evo Morales llamó a una consulta a las comunidades del Tipnis. Realizada ésta, el informe oficial señaló que 80% de las comunidades consultadas aprobaban la construcción de la carretera. Sin embargo, un informe de la Iglesia católica, realizado junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en abril de 2013, indicaba que la consulta "no fue libre ni de buena fe, además no se ajustó a los estándares de consulta previa y se la realizó con prebendas".[8]

El conflicto del Tipnis arrojó dos importantes conclusiones que deben ser leídas en clave boliviana, pero también latinoamericana: en primer lugar, como ha sido adelantado, dicho conflicto blanqueó el discurso gubernamental respecto de lo que éste entiende por desarrollo, algo que se encargó de hacer el vicepresidente A. García Linera en su libro *Geopolítica de la Amazonia* (2012). Para Linera, sin más extractivismo no habría cómo sostener las políticas sociales, lo cual significaría el fracaso del gobierno y la inevitable restauración de la derecha. En segundo lugar, en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan virulentos y politizados –donde el carácter recursivo de la acción lleva a que los diferentes actores se involucren en una lucha encarnizada– la posibilidad de realizar una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios –según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– se enrarece de modo inevitable, y la definición de sus procedimientos, mecanismos y temas termina siendo muy controversial.

8 Consúltese http://cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2014:obispos-defienden-su-informe-de-la-consulta-previa-en-el-tipnis&catid=82:noticias&Itemid=2.

Por último, en continuidad con la segunda fase, a partir de 2013-2015 y hasta la actualidad, asistimos a una *exacerbación del neoextractivismo*. Uno de los elementos relevantes que explica esta línea, en términos de continuidad agravada, se refiere a la caída de los precios de las materias primas, que impulsó a los gobiernos latinoamericanos a incrementar aún más el número de proyectos extractivos, a través de la ampliación de las fronteras de los commodities (Moore 2013; Terán 2016). En ese contexto, no sólo la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no estaba preparada para la caída de los precios de los productos básicos (como puede verse de manera cabal con Venezuela), sino que rápidamente se observarían consecuencias en la tendencia a la caída en el déficit comercial (Martínez 2015) y la recesión (Peters 2016).

A esto hay que sumar el declive de la hegemonía progresista/populista y el fin del ciclo progresista, hecho que tendrá un fuerte impacto en la reconfiguración del mapa político regional, tema que se tratará más adelante.

Territorio y nuevos lenguajes de valoración

En la actualidad, parece haber un consenso implícito entre diferentes analistas latinoamericanos acerca de que una de las dimensiones constituyentes de las resistencias sociales contra el extractivismo es la defensa del territorio y la *territorialidad*. Ciertamente, territorio y territorialidad son conceptos en disputa, pues no sólo aparece en la narrativa de las organizaciones indígenas y los movimientos socioambientales, sino también el discurso de las corporaciones, de los planificadores, de los diseñadores de políticas públicas, en fin, del poder político, en sus diferentes escalas y niveles. En suma, la noción de territorio se convirtió en una suerte de *concepto social total*, a partir del cual es posible visualizar el posicionamiento de los diferentes actores en pugna y, aún más, a partir de él analizar las dinámicas sociales y políticas.

La apropiación del territorio nunca es sólo material, es también simbólica (Santos 2005). Como afirma el geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes, "convivimos con diferentes tipos de territorios productores y producidos por distintas relaciones sociales, que son disputados cotidianamente" (Mançano 2008). Sin duda, es la geografía crítica brasileña la que ha contribuido enormemente al enriquecimiento y reactualización del concepto de territorio, sobre todo desde una mirada que pone el acento en la necesidad de "grafiar los territorios desde abajo" (Porto 2001), vale decir, una aproximación al sentido de territorio y territorialización que hacen los movimientos sociales en lucha. Para Carlos Porto Gonçalves, nuestra época puede ser comparada al Renacimiento, en la medida en que asistimos a un proceso de (re)configuración geográfica, donde los diferentes actores y segmentos de la sociedad no están presentes del mismo modo en esos procesos instituyentes. La territorialidad se realiza en un espacio complejo, en el cual se entrecruzan lógicas de acción y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes. En una línea similar, otro geógrafo brasileño, Rogerio Haesbert (2011), reflexiona en términos de multiterritorialidad, a la cual lee como la contracara de la globalización. En realidad, lejos de estar asistiendo a un "fin de los territorios", frente a nosotros se va delineando una geografía más compleja, la multiterritorialidad, con fuertes connotaciones rizomáticas, esto es, no jerarquizadas, ilustrados por territorios-red construidos desde abajo por los grupos subalternos.

En términos generales, tanto en los movimientos urbanos como rurales, el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, la territorialidad como dimensión material ha sido comprendida muchas veces exclusivamente como autoorganización comunitaria, tanto de los movimientos campesino-indígenas como de los movimientos sociales urbanos, asociados a la lucha por la tierra y los reclamos en torno a las necesidades básicas. Sin embargo, hacia el año 2000, la disputa por el territorio tuvo otras inflexiones, a partir de las nuevas modalidades que adoptó la lógica del capital en los espacios considerados estratégicos en términos de bienes naturales. En este sentido, los megaproyectos extractivos, tales como la minería metalífera a gran escala, el avance de la frontera hidro-

carburífera, de los agronegocios, incluso el urbanismo neoliberal, entre otros, pueden pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual se va generando una "tensión de territorialidades" (Porto 2001), a través del despliegue de una visión dominante de la territorialidad que se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes).

En el marco del Consenso de los Commodities, asistimos a una vuelta de tuerca de la noción dominante de territorio. Parafraseando al geógrafo Robert Sack (1986), se podría decir que, en aras del capital, empresas y gobiernos, proyectan una visión eficientista de los territorios, que considera a éstos como "socialmente vaciables", en la medida en que contienen bienes valorizados por el capital. En nombre de la ideología del progreso, las comunidades allí asentadas aparecen invisibilizadas, las economías regionales devaluadas o sus crisis exacerbadas, a fin de facilitar el ingreso de otros modelos de desarrollo, que terminan convirtiéndose en agentes de ocupación territorial. Estos procesos de devaluación se potencian en regiones tradicionalmente relegadas. Por ejemplo, en la Patagonia argentina, vastos territorios son considerados como un "desierto", lo cual trae oscuras reminiscencias, pues esta metáfora fue utilizada a fines siglo XIX para acorralar y exterminar poblaciones indígenas, desvalorizando lo que éstas representaban en términos de cultura y hábitat. En la actualidad, la metáfora del desierto es utilizada nuevamente por funcionarios del gobierno nacional y provincial para plantear, por ejemplo, la necesidad de la minería a gran escala, la expansión de la frontera petrolera a través del fracking o agronegocios como única alternativa productiva.

Algo similar sucede con la vasta Amazonia, otro territorio relegado. Como afirma Porto (2017), ésta no solo es considerada como una "reserva de recursos" o "fuente inagotable", sino también como un "vacío demográfico", que acaba por ser asumido por las clases dominantes en su inserción subordinada a los centros mundiales de poder, ignorando la complejidad geográfica de la región. Esta visión eficientista es complementaria con la caracterización de territorio como ocioso o improductivo. En el plano latinoamericano fue sin duda el expresidente peruano Alan García quien en 2007 expresó de modo más descarnado dicha visión, cuando publicó el artículo "El síndrome del perro del hortelano", en el tradicional diario *El Comercio*, de Lima, en el cual anticipaba de manera brutal su política en relación con la Amazonia. En dicho artículo sostenía que los indígenas amazónicos que se oponían a la explotación de sus territorios ociosos eran como "el perro del hortelano". En palabras de García, la Amazonia completa era considerada un territorio ocioso que debía convertirse en un territorio eficiente y productivo, a través de la expansión de las fronteras minera, energética y petrolera.[9]

En suma, la afirmación de que existen regiones marcadas históricamente por la pobreza y la vulnerabilidad social, con una densidad poblacional baja, que cuentan con grandes extensiones de territorios "improductivos", facilita la instalación de un discurso eficientista y excluyente en nombre de las dinámicas globales del capital. Sea que se los conciba como territorios socialmente vaciables, ociosos, desiertos o vacíos, el resultado es similar: la desvalorización de otras formas productivas, la devaluación de las economías regionales, en fin, la obturación de otros lenguajes de valoración del territorio, vinculados a los sectores subalternos y crecientemente incompatibles con el modelo dominante.

Matrices político-ideológicas y giro ecoterritorial de las luchas

Antes de hablar de las resistencias sociales, vale la pena aclarar que existen por lo menos cuatro matrices político-ideológicas diferentes que atraviesan los avatares del campo contestatario latinoamericano:[10] la in-

9 Estos dichos se materializaron en junio de 2008, cuando el ejecutivo sancionó un centenar de decretos legislativos, entre ellos el paquete de 11 leyes que afectaban a la Amazonia. Los decretos legislativos, que fueron rebautizados como "la ley de la selva" por las organizaciones indígenas y ONG ambientalistas, fueron cuestionados desde diferentes sectores. Finalmente, se realizó la represión de Bagua (5 de junio de 2009), que costó la vida de una treintena de habitantes de la región amazónica, diez policías y un número indeterminado de desaparecidos.

10 Por matrices político-ideológicas entiendo aquellas líneas directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como la concepción acerca del cambio

dígena-campesina comunitaria, la populista-movimientista, la clasista tradicional y, de manera más reciente, la narrativa autonomista. La matriz campesino-indígena se inserta en el marco de la memoria larga de los pueblos indígenas, y se funda sobre la idea de resistencia ancestral, derechos colectivos y poder comunal. En términos de memoria corta, su evolución se conecta con diferentes procesos: a nivel internacional con la descolonización y el reconocimiento progresivo de los derechos colectivos (incorporación del Convenio 169 de la OIT a las diferentes constituciones nacionales, posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas); a nivel regional con la crisis del Estado modernizador desarrollista y el relativo fracaso de la integración en una identidad mestizo-campesina; a nivel nacional con el proceso de ampliación de las fronteras étnicas, esto es, la presencia cada vez más masiva de indígenas en las ciudades. Por último, en términos ideológicos se conecta con la crisis del marxismo y el surgimiento del multiculturalismo, como perspectiva de construcción identitaria.

En segundo lugar, otra de las matrices que recorre el campo de las organizaciones populares en América Latina es la populista o nacional-popular. Esta se instala en la memoria mediana, asociada a las experiencias políticas populistas fundacionales de los años 1930-1950, y se sostiene sobre el triple eje de la afirmación de la nación, el estado redistributivo y conciliador, el liderazgo carismático y las masas organizadas –el pueblo–. Si bien en líneas generales la matriz populista suele combinar la apelación a un proyecto nacionalista radical con el modelo más clásico de la participación controlada, la evidencia histórica ilustra

social. Si bien cada matriz político-ideológica posee una configuración determinada, los diferentes contextos nacionales así como las tensiones internas las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particular. Por otro lado, las matrices político-ideológicas a las que hacemos referencia no se encuentran en estado puro, pues las diferentes dinámicas políticas han dado paso a diversos entrecruzamientos y conjunciones (entre indianismo y marxismo, entre indianismo y matriz populista, entre indianismo y narrativa autonómica, entre marxismo y autonomismo, por dar algunos ejemplos), como también a un proceso de conflicto y colisión, que puede llevar a acentuar las diferencias en términos de concepciones, modos de hacer la política y concebir el cambio social. Véase Svampa (2010 y 2017).

sobre todo el segundo modelo basado en la heteronomía de los movimientos sociales y sindicales, ante el llamado del líder (o lideresa), desde el aparato del Estado (resubalternización y estatalización de los movimientos sociales).

En tercer lugar, hay que destacar la matriz clasista, la cual presenta una concepción del poder (y por ende del cambio social) ligada a la idea del antagonismo de clases y a la construcción del socialismo. Dicha matriz nutre su narrativa de las diferentes variantes del marxismo partidario e internacionalista, de corte obrerista, que encuentra diversas expresiones en América Latina (ligadas al partido comunista, al maoísmo y los diversos trotskismos existentes). Esta concepción obrerista de la sociedad tradicionalmente ha conspirado en contra de la comprensión de la diversidad y la heterogeneidad social existente en las sociedades periféricas. No es casual que históricamente, a la hora de referirse a la *clasicidad* (la capacidad de actuar de manera autónoma, esto es, como actor de clase) de los sujetos sociales subalternos (campesinos, indígenas, marginales, informales, sectores rurales), se haya instalado la idea de que las sociedades latinoamericanas se caracterizan por actores débiles o sujetos semiplenos, con escasa autonomía de clase, o incluso manipulados por otros actores sociales. De allí que la tensión entre la matriz clasista y el resto de las matrices existentes en el campo contestatario tienda a ser más manifiesta que latente.

En cuarto lugar, existe una narrativa autonomista, cuya actualización se instala en el marco de la memoria corta, si bien sus elementos pueden nutrirse de la tradición anarquista y/o consejista. Los elementos centrales que configuran dicha matriz son la afirmación de la autonomía, la horizontalidad y la democracia por consenso. En este caso particular, me refiero a una narrativa porque ésta se construye como un relato identitario, de producción del sujeto, en el cual cuenta la experiencia personal de los actores antes que la inscripción previa en la comunidad (matriz indigenista), la figura del pueblo (populismo) o la clase social (matriz marxista). Por otro lado, históricamente es una narrativa que se nutre del fracaso general de las izquierdas tradicionales, por lo cual cobra relevancia la definición por oposición respecto de otras tra-

diciones de izquierda, principalmente la izquierda marxista. Asimismo, aparece ligada a los procesos de desinstitucionalización de las sociedades contemporáneas y la emergencia de nuevas dinámicas de individualización. La narrativa autonómica ha dado lugar a nuevos modelos de militancia, difundidos tanto en los países del centro como en la periferia, cuya modalidad de construcción organizativa son los grupos de afinidad a través de colectivos. Su expansión, tanto en el amplio campo del activismo ambiental y cultural como el de la comunicación alternativa, los feminismos populares, la lucha antipatriarcal, la intervención artística y la educación popular, constituye una de las características más emblemáticas de las nuevas movilizaciones sociales asociadas al cambio de época.

A partir de esta aclaración, podemos empezar a delinear dos procesos, más allá de las marcas específicas del ciclo progresista. Por un lado, desde el punto de vista institucional, con la emergencia de gobiernos progresistas asistimos a una dinámica política que –con matices y gradaciones diferentes– conllevó la estatalización de numerosos movimientos sociales, espacio en el cual la matriz populista fue emergiendo como hegemónica, instalando una tensión con otras matrices político-ideológicas; sea con la forma comunal, asociada a la matriz campesino-indígena, así como con la narrativa autonómica. En otras palabras, durante el ciclo progresista, la actualización de la matriz populista se expresaría por una creciente dinámica hegemónica, a partir del rechazo y/o la absorción de elementos de otras matrices contestatarias –la narrativa indígena-campesina, las nuevas izquierdas autonómicas–, que habían tenido un rol importante en los inicios del cambio de época.

Por otro lado, a partir del año 2003, la dinámica de las luchas socioambientales fue asentando las bases de un lenguaje común de valoración sobre la territorialidad, algo que podemos denominar como giro ecoterritorial, ilustrado por la convergencia de diferentes matrices y lenguajes, esto es, por el cruce innovador entre matriz indígena-comunitaria y narrativa autonómica, en clave ambientalista, a lo que se añadió, al promediar el fin de ciclo, la clave feminista. En consecuencia, surgió una narrativa común que busca dar cuenta del modo en cómo se piensan y representan las actuales luchas socioambientales, centradas en la defensa de la tierra y el territorio. El giro ecoterritorial hace referencia a la construcción de marcos de la acción colectiva,[11] que funcionan al mismo tiempo como estructuras de significación y esquemas de interpretación contestatarios o alternativos. Dichos marcos colectivos tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora, instalan nuevos temas, lenguajes y consignas, en términos de debates de sociedad, al tiempo que orientan la dinámica interactiva hacia la producción de una subjetividad común en el espacio latinoamericano de las luchas.

La consolidación de un lenguaje de valoración alternativo a la territorialidad dominante pareciera ser más inmediato para el caso de las organizaciones indígenas y campesinas, debido tanto a la estrecha relación que éstas plantean entre tierra y territorio, en términos de comunidad de vida, como la notoria reactivación de la matriz comunitaria indígena acaecida en las últimas décadas. Sin embargo, lejos de ser exclusivo de aquellos países en los cuales existe una notoria presencia de pueblos originarios, históricamente excluidos, el giro ecoterritorial abarca también otros países en los cuales se expresa por medio de diferentes experiencias policlasistas y multiétnicas y diversos formatos organizacionales.

Los conflictos socioambientales y sus escalas

La explosión de conflictos socioambientales tuvo como correlato aquello que el reconocido ensayista mexicano Enrique Leff llamó "la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano" (Leff 2004). A esto hay que añadir

11 Erving Goffman definió a los marcos como "esquemas de interpretación que capacitan a los individuos y grupos para localizar, percibir, identificar y nombrar los hechos de su propio mundo y del mundo en general" (Goffman 1991, 30-31). Para Gamson, los marcos son definidos por tres elementos básicos: la (in)justicia, la capacidad de agencia y el trabajo sobre la identidad (ellos/nosotros). Desde una perspectiva constructivista e interaccionista existen, sin embargo, diferentes enfoques sobre los "procesos de enmarcamiento" (véase Meyer y Gamson 1999). En esta línea, aclaro que no suscribo a un enfoque meramente instrumental en el uso de los marcos colectivos, sino más bien una dimensión cultural y moral, ligada al marco de la injusticia.

que el escenario aparece marcado no sólo por luchas indígenas-campesinas, sino también por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos (pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista y caracterizados por un formato asambleario y un potencial antagonista importante.[12] A su vez, en este nuevo entramado social juegan un rol no menor diferentes colectivos culturales, ciertas ONG ambientalistas (con lógica de movimientos social), intelectuales y expertos, que acompañan –e incluso coprotagonizan– la acción de organizaciones y movimiento sociales. Como suele suceder en otros campos de lucha, la dinámica organizacional tiene como actores centrales jóvenes, muchas de ellas mujeres, cuyo rol es también crucial tanto en las grandes estructuras organizacionales como en los pequeños colectivos de apoyo a las acciones.

Los cruces y articulaciones entre organizaciones dieron lugar a numerosos espacios de coordinación, como el de vía campesina o, en otra escala, foros temáticos (de defensa del agua, de defensa de los recursos naturales, contra el fracking), plataformas de acciones conjuntas (contra el Área de Libre Comercio de las Américas [ALCA], contra los megaproyectos del IIRSA y, actualmente, contra el Acuerdo

[12] Es importante señalar que el concepto de movimiento social parece haber entrado en crisis. Algunas autoras, como Silvia Rivera Cusicanqui, proponen erradicarlo, dado la manipulación que han sufrido por parte de los progresismos (por comenzar, en Bolivia, donde se habla del "gobierno de los movimientos sociales"). Otros, como Raúl Zibechi, proponen reemplazarlo por el concepto de "sociedad en movimiento", todavía muy incipiente, pero que presenta potencialidad analítica. También están aquellos que prefieren hablar de "movimientos antagonistas", como Massimo Modonesi (2016). Mi posición consiste en distinguir entre, por un lado, movimientos sociales en *sentido fuerte* (lectura que ha prevalecido en América Latina), lo cual alude a la idea de un actor o movimiento social que tiende a cuestionar la lógica de dominación. Esta definición teórica implica la posibilidad de pensar a los movimientos sociales como sujetos potencialmente antagónicos en el marco de un sistema de dominación. Por otro lado, propongo hablar de movimientos sociales en *sentido débil*, para aludir a un tipo de acción colectiva por parte de los actores que no tienen poder que busca intencionalmente modificar algún elemento del sistema social establecido, a través de una acción contenciosa, con una cierta continuidad organizativa. El tema se aborda en Svampa (2017).

Transpacífico). En este sentido, lo más novedoso es la articulación entre actores diferentes, lo cual promueve un diálogo de saberes y disciplinas, caracterizado por la valorización de los saberes locales como también por la elaboración de un saber experto independiente de los discursos dominantes. El tema no es menor, pues a partir de esta articulación las diferentes organizaciones y movimientos elaboran diagnósticos comunes, expanden la plataforma discursiva, que excede la problemática local y nacional, así como diversifican las estrategias de lucha combinando la movilización de base y la articulación de redes sociales con la generación y aplicación de diferentes instrumentos técnicos y legales (amparos colectivos, nuevas ordenanzas, demanda de consulta púbica y leyes de protección del ambiente y de los derechos de los pueblos originarios).

De todas las actividades extractivas en América Latina, la más cuestionada es sin duda la minería metalífera a gran escala. Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos de minería que no tenga conflictos sociales que enfrente las empresas mineras y el gobierno a las comunidades: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Existen varios espacios consagrados al tema minero, entre ellos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), creado en 1991, con sede en Chile, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que funciona desde 1997 y articula más de 40 organizaciones, entre las cuales se halla Acción Ecológica, de Ecuador. Así, según el OCMAL, en 2010 había 120 conflictos mineros que afectaban a 150 comunidades; en 2012 éstos ascendían a 161 conflictos, que incluían 173 proyectos y 212 comunidades afectadas. En febrero de 2014, el número de conflictos era de 198, con 297 comunidades afectadas y 207 proyectos involucrados. En enero de 2017, había 217 conflictos, que involucraban 227 proyectos y 331 comunidades. Los países con mayor cantidad de conflictos son Perú (39), México (37), Chile (36), Argentina (26), Brasil (20), Colombia (14) y Ecuador (7). Asimismo, 6 conflictos son de carácter transfronterizo (OCMAL). Según el Atlas de Justicia Ambiental (Ejatlas, por sus siglas en inglés), el incremento de los conflictos

se produjo a partir de 1997 y especialmente a partir de 2006-2008. La base del OCMAL muestra un incremento a partir de fechas similares (Villegas 2014, 10-11).[13]

Resulta imposible realizar un relevamiento de los conflictos socioambientales o un listado de las redes autoorganizativas, nacionales y regionales, de carácter ambiental que hoy existen en América Latina. Sin pretender exhaustividad alguna y sólo a título de ejemplo, se hará una breve revisión de algunos conflictos y redes en países como Perú, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Colombia, México y Argentina.[14] En 2013, en Perú, país con una tradición de minería a gran escala, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de un total de 120 conflictos aquellos ligados a la minería representaban 48% del total de conflictos sociales.[15] En 2016, el porcentaje había ascendido a 68%, pues ya eran 220 los conflictos sociales que las autoridades peruanas tenían identificados en todo el territorio nacional, de los cuales 150 están relacionados con la imposición de proyectos mineros.[16] Entre las organizaciones pioneras a nivel continental en la lucha contra la megaminería, se destaca la Confederación

13 El Ejatlas es un proyecto en el cual participan un equipo internacional de expertos, procedentes de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países, y está coordinado por los investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de Joan Martínez Alier. Al mismo tiempo, se trata de un proyecto colectivo en el cual participa la sociedad civil.

14 Existe una bibliografía enorme sobre los conflictos socioambientales a nivel nacional, ligados al extractivismo en América Latina. Para el caso de Perú, se recomiendan los textos de De Echave (2009) y Hoetmer, Castro, Daza y De Echave (2013), que articula el saber contraexperto con una mirada desde los movimientos sociales contra la megaminería. Para el caso de Bolivia, véanse los trabajos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (2014); para Colombia los textos de Roa y Navas (2014) y de Archilla (2015); para el caso de México, véanse Composto y Navarro (2011) y Navarro (2015), así como Delgado (2010) y Lemus (2018). Para una cartografía de los conflictos ambientales en Argentina véanse Merlinsky (2016), Giarracca y Teubal (2013), Svampa y Viale (2014), Sola y Bottaro (2013) y Machado (2013 y 2014).

15 Consúltese http://www.defensoria.gob.pe/blog/mineria-y-conflictos/.

16 Contralínea. 2016. "Perú: 150 conflictos mineros". Acceso el 12 de enero de 2017. http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/16/peru-150-conflictos-mineros/.

Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), nacida en 1999. Otra organización importante es el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), de Cajamarca, que tiene una larga trayectoria de intervención y lucha, y cuyo dirigente, el exsacerdote y sociólogo Marco Arana, fundó en 2009 el partido Tierra y Libertad.[17] En la actualidad, si bien la Conacami ya no tiene la presencia territorial y la capacidad de articulación que supo tener hasta 2008-2009, en su lugar se han fortalecido otras estructuras organizativas locales, como las rondas campesinas cuyo rol es cada vez mayor en la lucha contra la megaminería (Hoetmer, Castro, Daza y De Echave 2013, 268).

En Bolivia, la ola extractivista abarca desde la minería, la explotación de hidrocarburos, el avance de los agronegocios y, más recientemente, una serie de proyectos energéticos incluidos en la llamada Agenda Patriótica 2025, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que involucra la construcción de varias megarrepresas y una central nuclear en El Alto. Como ha sido dicho, el parteaguas fue el conflicto del Tipnis, en 2011, por la construcción de una carretera. La defensa del extractivismo estuvo a cargo del vicepresidente Álvaro García Linera, quien en 2015 amenazó con expulsar a cuatro ONG bolivianas (Centro de Documentación e Información Bolivia [Cedib], Terra, CEDLA y Milenio), varias de las cuales realizan trabajos de investigación sobre el neoextractivismo y la expansión de la frontera de agronegocios, acusándolas de defender "los intereses de la derecha política internacional".[18] En 2016, el gobierno sancionó una nueva ley, que apunta a restringir la libertad de asociación y pone a las ONG críticas en riesgo de cierre, si éstas no se ajustan a la Agenda Patriótica 2025 y el Plan Nacional de Desarrollo. En 2017, la situación de hostigamiento y persecución del Cedib era cada vez mayor, haciendo su funcionamiento casi insostenible.

17 Este partido, rebautizado Tierra y Dignidad, participó del Frente Amplio de Izquierda, que salió tercero en las elección generales de 2016 con la candidatura de Verónika Mendoza.

18 Véase la carta pública de intelectuales al vicepresidente García Linera en http://www.eldeber.com.bo/bolivia/intelectuales-piden-garcia-linera-respete.html.

Uno de los casos más preocupantes es Ecuador, donde pese a que la propia Constitución establece los derechos de la naturaleza, la respuesta del gobierno de Correa a la conflictividad socioambiental fue la criminalización y judicialización de la protesta, por la vía de juicios penales a voceros de organizaciones indígenas, con sentencia de cárcel por diez años,[19] así como al retiro de personería jurídica y la expulsión de algunas ONG –Fundación Pachamama (2013), hostigamiento y amenaza de la disolución de la reconocida ONG Acción Ecológica (tanto en 2009 como en 2016), cancelación de visa y expulsión de consultores extranjeros ligados a dirigentes ambientalistas en 2014 y 2015–. Asimismo, el gobierno ecuatoriano se valió de artilugios legales para invalidar la demanda de Iniciativa Popular, que propuso el movimiento ciudadano Yasunidos, luego de que decidiera unilateralmente el fin de la moratoria en el Parque Yasuni y el inicio de la explotación petrolera. Pese a las resistencias importantes contra la megaminería (Ecuador no tiene tradición de minería a gran escala), a partir de 2013 el gobierno avanzó a través de la militarización de los territorios, entre ellos Intag, un bastión en la lucha contra este tipo de actividad, donde la población expulsó a varias empresas mineras y había apostado a desarrollos alternativos. A esto se agrega que las empresas chinas, que lideran la inversión minera en ese país, han sido acusadas de prácticas laborales abusivas.[20] Según Acción Ecológica, ya en 2012 empresas chinas ligadas al proyecto minero Mirador fueron denunciadas por incumplimiento de beneficios laborales, malos tratos, salarios injustos y accidentes por la comunidad shuar. En 2016, hubo nuevos conflictos

19 Véase el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que recoge casos de criminalización de defensores de DD. HH. en América Latina; entre ellos se ocupa de casos de criminalización en Intag y de los indígenas de la Federación Shuar (2015). Consúltese en https://www.fidh.org/IMG/pdf/criminalisationobsangocto2015bassdef.pdf.

20 Además, las empresas chinas cuentan con numerosos beneficios, pues "ejecutan los proyectos financiados con créditos chinos otorgados con altas tasas de interés, y además, normalmente el pago está sujeto a insumos que ellos mismos suministran y a la contratación de mano de obra china". Consúltese http://catapa.be/es/noticias/el-cuento-de-la-miner%C3%ADa-china-en-ecuador. Para el tema de la minería y la presencia de empresas chinas en Ecuador, véase Chicaiza (2014).

cuando indígenas shuar tomaron un campamento minero en la región de la Amazonia. El ingreso de la empresa china se realizó sin consulta previa y con militarización de los territorios. En diciembre de ese año, frente al reclamo de la comunidad shuar, los niveles del conflicto escalaron de tal manera que hubo un muerto y varios heridos. La respuesta del entonces presidente Correa fue declarar el estado de excepción, acusar de "grupos paramilitares y semidelincuenciales" a los indígenas shuar y anunciar la disolución de Acción Ecológica. Finalmente, a raíz de la solidaridad nacional e internacional, el Ministerio de Ambiente de ese país desestimó el pedido de disolución enviado por el Ministerio de Interior.

Asimismo, en Colombia, entre 2001 y 2011 el 25% de los conflictos tuvieron relación con el petróleo, el oro y el carbón (Roa y Navas 2014, 35). En 2010, durante su primera campaña presidencial, J. Manuel Santos lanzó la consigna "Colombia, la locomotora minero-energética". Uno de los proyectos mineros que suscitó enormes resistencias es La Colosa, a cargo de la empresa Anglo Gold Ashanti, el cual, de haberse construido, se habría convertido en la quinta mayor mina de oro en el mundo, afectando a numerosas localidades del departamento de Tolima, considerada la despensa agrícola de Colombia. Allí se crearon comités ambientales en defensa de la vida, que impulsaron consultas públicas. Luego de una primera consulta en la localidad de Piedras, en 2013, los comités ambientales se abocaron a organizar consultas en Cajamarca e Ibagué, encontrando serios obstáculos legales y empresariales. Finalmente, en abril de 2017 se realizó una consulta pública en Cajamarca, que también arrojó un resultado negativo para La Colosa. Ese mismo año, ante la ausencia de licencia social, la empresa Anglo Gold Ashanti decidió suspender todas las actividades del proyecto.[21]

Pero la megaminería no es el único frente de conflicto extractivista en Colombia. También se halla el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, el río más importante del país, que nace en la cordillera,

21 En los últimos años, en un contexto en el cual se flexibilizaron los controles ambientales, Anglo Gold Ashanti, una compañía de origen sudafricano pero con mayoría de accionistas estadounidenses y británicos, llevó a cabo un acaparamiento de títulos mineros, que pasó casi desapercibido en la sociedad colombiana.

con una longitud de 1 500 km. La concesión del río forma parte de la política de IIRSA, y lejos de mejorar las condiciones ambientales y sociales del río, apunta a convertirlo en una gran hidrovía para transportar con barcos de gran calado carbón, petróleo y hoja de palma, destinado a la exportación. El otro objetivo es convertirlo en un gran generador de energía a través de la construcción de varias represas, muchas de las cuales estarían al servicio de los proyectos mineros. Este enorme plan de privatización del río Magdalena (controlado por una empresa de origen chino) ha originado una movilización que tomó el nombre de El Río de la Vida.

En México, se creó en 2008 la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) contra la megaminería, las represas hidroeléctricas, la urbanización salvaje y las megagranjas industriales. Hay experiencias emblemáticas como la del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Perota (CECOP), que durante 10 años reunió la lucha de campesinos indígenas en Guerrero bajo la consigna "Nosotros somos los custodios del Agua" (Navarro 2015, 141). Otra experiencia importante es la del Frente Amplio Opositor (FAO) contra la minera San Xavier, el cual se convirtió en un espacio de numerosas actividades públicas, rondas informativas, consultas, disputa legal, que tuvo su punto culminante en 2006, cuando la empresa construyó las bases del yacimiento (el que inicialmente planeaba demoler el pueblo) (Composto y Navarro 2011, 51).

Por otra parte, en Nicaragua existe uno de los megaproyectos más ambiciosos y controversiales de la región, el Canal Interoceánico, tres veces mayor que el Canal de Panamá, concesionado a la empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND). En noviembre de 2015 el inicio de las obras fue postergado debido a las protestas campesinas y frente al cuestionamiento del estudio de impacto ambiental de parte de expertos internacionales convocados por la Academia de Ciencias de Nicaragua (2015). Como consecuencia de ello, nació el Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional. La primera protesta de comunidades afectadas ocurrió en 2014. A fines de 2016, una marcha campesina contra el proyecto canalero que pretendía llegar a Managua fue reprimida por la policía y los militares, generando numerosos heridos de bala y detenidos. Sin embargo, por el momento no han podido iniciarse las obras, las cuales afectarían numerosas comunidades y tendrían graves impactos sobre el Gran Lago de Nicaragua, la reserva de agua dulce más grande de la región.

Por último, en Argentina se destacan las asambleas en defensa del agua, unificadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, surgida en 2006) originariamente ligada a la lucha contra la megaminería, y en menor medida a la crítica al modelo de agronegocios. Esta tiene un formato asambleario y se reúne tres veces al año, con el objetivo de diseñar estrategias comunes de resistencia frente al avance del modelo minero en 12 provincias y defender las leyes provinciales (7 en total) que prohíben la megaminería en ese país. Respecto de los agronegocios, vinculado a la expansión de la soja transgénica, el corazón del capitalismo agrario en Argentina, las resistencias fueron más difíciles de visibilizar, pese al rol pionero de las Madres del Barrio Ituzaingó, en la provincia de Córdoba. Desde 2007 existe la campaña "Paren de fumigar", promovida por el Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat) de Santa Fe, el Grupo de Reflexión Rural (GRR) y otros grupos (Melón 2014, 79). En este proceso de visibilización ha sido crucial el rol de médicos e investigadores, como Andrés Carrasco, y otros profesionales que crearon la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.[22]

22 En 2009 por el Dr. Andrés Carrasco, profesor de Embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet, dio a conocer su investigación en embriones sobre los efectos dañinos del agroquímico glifosato, comprobando que, con dosis de hasta 1 500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones que se realizan en los campos argentinos, se presentaban trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. La campaña de difamación contra Carrasco tuvo varias repercusiones (amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediáticas e institucionales, fuertes presiones políticas), lo cual generó una declaración de apoyo firmada por más de 300 investigadores y colegas del ámbito nacional e internacional, en defensa de la libertad de investigación y de la ética pública. La situación de hostigamiento e intolerancia se ha venido agravando, de cara a los resultados cada vez más elocuentes de las investigaciones científicas independientes en el campo de los agroquímicos y los organismos genéticamente modificados.